

# Desinformación y hegemonía discursiva en el Perú: un análisis crítico de los casos PIACI y las ONG ambientales

Disinformation and discursive hegemony in Peru: A critical analysis of the PIACI and environmental NGO cases

Iasmim Amiden dos Santos

Michigan State University. Michigan, Estados Unidos

amiden@msu.edu

ORCID: 0009-0004-9883-3218

Bruno Takahashi\*

Michigan State University. Michigan, Estados Unidos

btakahas@msu.edu

ORCID: 0000-0002-8570-4925

**Citar como:** Amiden dos Santos, I. y Takahashi, B. (2025). Desinformación y hegemonía discursiva en el Perú: un análisis crítico de los casos PIACI y las ONG ambientales. *Desde el Sur*, 17(4), e0086.

## RESUMEN

Este estudio analiza discursos y estrategias dentro de un sistema de desinformación sobre los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) y las organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientales en el Perú, así como su papel en la construcción social de estas poblaciones. También examina la interacción de las ONG con este sistema. Se integran la teoría de construcción de poblaciones objetivo (Schneider e Ingram, 1993), el sistema de desinformación (Recuero, 2025) y el análisis crítico del discurso (Fairclough, 2010), aplicado a un análisis multimodal de artículos, publicaciones de Facebook y videos de YouTube de las coaliciones desarrollista y pro-tectionista, triangulado con entrevistas en profundidad. Se observan estrategias de la coalición desarrollista que presentan a las ONG como *competidoras* y a los pueblos indígenas como *dependientes*, lo que evidencia la adaptación dinámica del sistema y aporta a la literatura sobre desinformación socioambiental en América Latina.

\* Autor corresponsal: Bruno Takahashi, Michigan State University. Michigan, Estados Unidos. Correo: btakahas@msu.edu

## PALABRAS CLAVE

ONG, pueblos indígenas, discursos, desinformación

## ABSTRACT

This study analyzes discourses and strategies within a disinformation system concerning Indigenous Peoples in Isolation and Initial Contact (PIACI) and environmental NGOs in Peru, and their role in shaping social constructions of these populations. It also examines the interaction of NGOs with this system. The study integrates the theory of the social construction of target populations (Schneider e Ingram, 1993), a systemic disinformation framework (Recuero, 2025), and Critical Discourse Analysis (Fairclough, 2010), applied to a multimodal analysis of articles, Facebook posts, and YouTube videos from both developmentalist and protectionist coalitions, triangulated with in-depth interviews. The developmentalist coalition employs strategies portraying NGOs as *contenders* and Indigenous peoples as *dependents*, highlighting the system's dynamism and adaptability, and contributing to the literature on socio-environmental disinformation in Latin America.

## KEYWORDS

NGOs, Indigenous peoples, discourse, disinformation

El 4 de septiembre de 2025, la Comisión Multisectorial de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) votó en contra de la propuesta para la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, que habría brindado protección a un grupo de comunidades indígenas en aislamiento voluntario y a sus territorios ancestrales (Redwin, 2025). La decisión se tomó tras años de un complejo proceso legal que enfrentó visiones contrapuestas sobre las poblaciones indígenas, el uso y la protección del territorio y el modelo de desarrollo económico en la región de Loreto.

El extractivismo y los problemas socioambientales que genera aún afectan de manera desproporcionada a comunidades marginadas en países latinoamericanos como el Perú (Llave Huamancha, 2020; Villarreal Villamar y Muñoz, 2018). Las actividades extractivas, como la minería —legal o ilegal— y la producción de hidrocarburos, suelen vincularse a paradigmas de desarrollo que históricamente han concebido a ecosistemas complejos como la Amazonía, y a las poblaciones que coexisten con estos territorios, como prescindibles y secundarios frente a los intereses económicos de los actores detrás de dichas actividades. Los conflictos

derivados de estas actividades y de sus impactos en poblaciones aledañas han incrementado la violencia contra defensores ambientales en el Perú y otros países de la región (Sepúlveda *et al.*, 2019).

Un componente crítico de estos conflictos es el discursivo. El debate público acerca de los conflictos socioambientales delimita sus parámetros y las características de los actores involucrados. En este sentido, las estrategias comunicacionales desempeñan un papel central en su evolución y desenlace. Más aún, la proliferación de la desinformación en espacios virtuales ha complejizado dichos procesos (Urbano *et al.*, 2024).

En este estudio examinamos dos casos interrelacionados en el contexto peruano: la desinformación sobre la Ley PIACI y las campañas de desprestigio contra las ONG ambientales, particularmente en el marco del proyecto de ley que busca modificar el marco legal que regula la cooperación internacional y el trabajo de las ONG.

Utilizamos una metodología mixta que triangula datos de un análisis crítico del discurso —en redes sociales y medios de comunicación— con un análisis cualitativo de entrevistas en profundidad, con el fin de contribuir teóricamente al estudio de la desinformación desde una perspectiva sistemática de los procesos y actores involucrados.

### **Sistemas de desinformación: consideraciones teóricas**

Las ONG, tanto locales como internacionales, que trabajan en derechos humanos y defensa ambiental operan en entornos hostiles, donde gobiernos y actores aliados combinan tácticas legales, reputacionales y operativas para limitar su actuación e influencia (Fransen *et al.*, 2021). Las restricciones a la financiación extranjera suelen introducirse tras elecciones competitivas cuando los regímenes perciben la ayuda externa como una amenaza política (Dupuy *et al.*, 2016). Estas medidas reflejan la estrategia descrita por Heiss y Kelley (2017), retomando a Mitchell y Schmitz (2014), denominada *instrumentalismo con principios*: las ONG mantienen objetivos basados en principios, pero los adaptan para sobrevivir en entornos restrictivos marcados por presiones políticas y de donantes. A estas barreras legales se suman campañas de criminalización y estigmatización en las que defensores de derechos humanos y ambientales son desacreditados en los medios antes de enfrentar procesos judiciales (Birss, 2017), lo que erosiona el apoyo comunitario y debilita su defensa legal.

Este contexto también transforma las redes de incidencia transnacional. Fransen *et al.* (2021) muestran que, bajo amenaza, las ONG modifican su lenguaje, ocultan colaboraciones transfronterizas y protegen la identidad de socios locales para evitar hostigamiento o arresto, lo que interrumpe el flujo de información y debilita la solidaridad global. En algunos

casos, como reportan Aguilar y Pinchi (2020) en el Perú, una gestión comunicacional débil limita la capacidad de las ONG para contrarrestar narrativas negativas o movilizar apoyo público, y así las dejan más expuestas a ataques coordinados.

En conjunto, estos estudios revelan una estrategia de represión de múltiples capas en la que las restricciones legales, daño reputacional, interrupción de canales de incidencia y debilidades internas se refuerzan mutuamente, por lo que reducen de forma sistemática la capacidad de las ONG —y, muchas veces, de las poblaciones que representan— para desafiar intereses políticos y económicos. En este marco, tanto la Ley 32301, que modifica la Ley 27692 de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) promulgada en abril de 2025, como el Proyecto de Ley 3518/2022-CR, que buscaba alterar los criterios de gestión y determinación de los PIACI, se insertan en esta dinámica de represión estatal y empresarial, analizada en detalle en este estudio.

### **Desinformación y campañas de desprestigio**

Las campañas de criminalización y estigmatización descritas anteriormente se expresan en campañas de desprestigio y desinformación. Estas campañas de desprestigio y desinformación han comenzado a recibir mayor atención académica, especialmente a raíz de la pandemia de covid-19 (Murillo, 2020; Turpo-Gebera *et al.*, 2023) y del negacionismo climático (por ejemplo, Bresolin, 2023). En el campo de la comunicación ambiental a nivel internacional, el interés se ha centrado en analizar las campañas de desinformación impulsadas por grandes emisores de contaminación responsables del cambio climático (por ejemplo, Hendlin y Palazzo, 2025). Sin embargo, aún existe una escasez de estudios sistemáticos sobre estos fenómenos —y su intersección— en América Latina (Urbano *et al.*, 2024) y, de manera más específica, en el Perú (Turpo-Gebera *et al.*, 2023).

Montes (2024) examinó la desinformación en torno a los PIACI en la región de Loreto desde la perspectiva de la teoría de la conspiración e identificó estrategias que contribuyen a una comprensión regional del fenómeno. Los resultados muestran que los argumentos centrales para justificar la derogatoria de la Ley PIACI se basan en la percepción de que las reservas PIACI benefician principalmente a ONG y minorías aisladas, mientras supuestamente ponen en riesgo el desarrollo regional y la soberanía territorial (Montes, 2024).

Por su parte, Echeverría *et al.* (2025) señalan que la desinformación orquestada por los gobiernos, al ser intencional, resulta particularmente efectiva y peligrosa, ya que estos suelen contar con legitimidad y confianza de las poblaciones a las que engañan (por ejemplo, Ozawa *et al.*,

2023). Estas campañas estatales presentan seis elementos distintivos: (1) planificación estratégica, (2) acceso privilegiado a recursos materiales y simbólicos, (3) sofisticación, (4) legitimidad percibida, (5) poder institucional, y (6) colusión entre empresas y medios de comunicación. Su principal fuerza radica en esta colusión entre actores estatales y corporativos, especialmente los medios hegemónicos (Echeverría *et al.*, 2025). La dependencia en fuentes oficiales, junto con una prensa partidaria consolidada (de extrema derecha e izquierda) y redes sociales con escasos controles, facilita la diseminación de desinformación estatal. A su vez, los medios independientes suelen convertirse en blanco de campañas de desprestigio y desinformación, como se analizará más adelante en el caso peruano (Ojo Público, 2025).

Este estudio se enmarca en la estructura sistémica de la desinformación propuesta por Recuero (2025), que articula los elementos (como fuentes o tipos de contenido), el ambiente (como características y posibilidades de las plataformas) y las dinámicas entre estos y los contextos sociales y políticos. Desde la teoría general de sistemas, este marco entiende la desinformación «como parte de una dinámica comunicativa, tecnológica y sociopolítica más amplia, en lugar de como contenido aislado o engaño intencional» (p. 9). Resulta útil para el presente análisis porque destaca las complejas interacciones entre entorno y elementos, y subraya que la desinformación (Amiden dos Santos y Takahashi, 2025), no surge en un vacío. Un ejemplo de ello es cómo estas dinámicas contribuyen a construir y reforzar representaciones sociales de distintas poblaciones en el marco de la disputa discursiva.

### **La construcción social de poblaciones objetivo**

La lucha discursiva generalmente moldea y se apropia de construcciones sociales sobre la realidad, incluyendo la construcción social de poblaciones, la cual puede influir en cómo una sociedad interpreta y se relaciona con estas representaciones, como ocurre en el ámbito de las políticas públicas (Uzma *et al.*, 2025). En este sentido, Schneider e Ingram (1993) desarrollaron la teoría de construcción social de poblaciones objetivo, que explica cómo esta construcción social influye en la agenda pública, la selección de herramientas de política y la justificación de la toma de decisiones. Según Schneider e Ingram (1993):

la construcción social de las poblaciones objetivo se refiere a las caracterizaciones culturales o imágenes populares de las personas o grupos cuyo comportamiento y bienestar se ven afectados por las políticas públicas. Estas caracterizaciones son normativas y evaluativas, y describen a los grupos en términos positivos o negativos

mediante lenguaje simbólico, metáforas e historias. (p. 334; traducido por los autores).

La teoría establece que la construcción social se determina a partir de la intersección de dos factores, cada uno con dos dimensiones: la construcción social relativa (positiva o negativa) y el poder político relativo (fuerte o débil). Por ejemplo, en un estudio sobre personas infectadas por VIH en Estados Unidos, los niños infectados tenían una construcción social positiva y poder político fuerte, mientras que los usuarios de drogas eran negativos y con poder débil (Donovan, 1993). Schneider e Ingram (1993) identifican cuatro construcciones sociales: privilegiados (positivos/poder fuerte), competidores (negativos/cierto poder), dependientes (positivos/poder débil) y anormales (negativos/poder débil). Estas categorías no son fijas ni inmutables; pueden ser cuestionadas y los grupos sociales pueden transitar entre ellas según cómo se les represente en un contexto y periodo determinados, lo cual también explica, en estudios de comunicación, la interacción entre discurso mediatizado y construcción social de realidades.

Esta teoría también permite comprender cómo diversos grupos de poder, como intereses económicos y el Estado, se refieren a sus opositores; en el caso de este estudio, las ONG ambientalistas y las comunidades afectadas por políticas públicas. Estas construcciones sociales condicionan las opciones de política pública, al otorgar beneficios o imponer consecuencias negativas a los grupos involucrados.

### **Análisis crítico del discurso**

Según Fairclough (2010), el análisis crítico del discurso (ACD) entiende el discurso como una práctica relacional que construye realidades y puede mantener o desafiar estructuras de poder. El discurso combina lenguaje, contexto e ideología de forma inextricable, e influye en la configuración de políticas públicas.

Desde el siglo XIX, una de las principales disputas discursivas, originada en Estados Unidos, ha enfrentado la lógica del mercado con la del bienestar social. Oreskes y Conway (2023) muestran cómo fuerzas corporativas usaron estrategias de comunicación y desprestigio para presentar la liberalización de mercados como libertad individual y la intervención estatal como comunismo, al difundir esta dicotomía globalmente junto con la globalización y el neoliberalismo.

Estrategias similares pueden observarse en medios y organizaciones que construyen narrativas contra la actuación de las ONG. Según Hajer (1995), las coaliciones discursivas articulan símbolos, narrativas y metáforas para legitimar políticas y construcciones sociales, mientras

marginalizan otras perspectivas. En este estudio, las coaliciones explican cómo medios y organizaciones coordinadas consolidan representaciones de las ONG y de los pueblos indígenas dentro de sistemas de desinformación, al influir en la percepción pública y la formulación de políticas.

## **Estudios de caso**

En este estudio integramos el ACD (Fairclough, 2010), la construcción social de poblaciones objetivo (Schneider e Ingram, 1993) y el abordaje sistemático de la desinformación (Recuero, 2025), los cuales ofrecen una perspectiva relacional de los procesos discursivos que supera enfoques centrados únicamente en contenido, política o efectos del consumo. Examinamos dos estudios de caso estrechamente relacionados: las PIACI en Loreto y los ataques contra las ONG ambientales. Ambos temas se articulan porque algunas ONG ambientalistas en el Perú han estado fuertemente vinculadas a la defensa de las PIACI, mientras eran simultáneamente atacadas por grupos de derecha, tanto a nivel regional en Loreto como a nivel nacional, mediante iniciativas legislativas orientadas a deslegitimadas y restringir su poder.

## **Discursos en torno a los PIACI**

Según el Ministerio de Cultura del Perú (2020), los PIACI habitan las zonas más remotas de la Amazonía peruana y se encuentran en un estado de gran vulnerabilidad. Se estima que su población asciende a aproximadamente 7000 personas, de las cuales unas 4900 viven en aislamiento y alrededor de 2100 en contacto inicial, distribuidas en las regiones de Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Además, en el país existen reservas indígenas y territoriales establecidas por el Estado a favor de los PIACI, que abarcan más de 4,5 millones de hectáreas de bosque —equivalentes al 3,6 % del territorio nacional—, y se han presentado cinco solicitudes de creación de nuevas reservas en las regiones de Loreto y Ucayali (Ministerio de Cultura, 2023). La Amazonía peruana ha sido escenario de múltiples violencias contra los pueblos indígenas, desde la opresión del auge del caucho a fines del siglo XIX hasta la contaminación por derrames de petróleo en los años 1970 (Acosta, 2015). En este contexto, la Ley 28736, promulgada en 2006, estableció un marco de protección para los PIACI, con el fin de salvaguardar su cultura, sus territorios y sus derechos frente a la explotación de recursos por parte de foráneos, como, por ejemplo, la explotación petrolera. Sin embargo, en 2023 se presentó el Proyecto de Ley 3518/2022-CR (conocido como proyecto de ley anti-PIACI), que buscaba transferir competencias del Ministerio de Cultura a los gobiernos regionales y modificar los criterios para determinar la presencia de PIACI en un territorio. La iniciativa, impulsada por intereses comerciales, surgió

en Loreto, la región amazónica más extensa y principal productora de petróleo del país, que concentra pozos en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, además de una notable diversidad biológica y áreas naturales protegidas como la Reserva Nacional Pacaya-Samiria.

## Discursos en torno a las ONG ambientalistas

La Ley 27692 de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) atravesó un proceso legislativo altamente contencioso. En 2024, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un dictamen para modificarla. Esta modificación —la Ley 32301—, finalmente promulgada en abril de 2025, amplía el control y el poder sancionador del Ejecutivo sobre las ONG que reciben financiamiento internacional. En su forma más severa, prevé la cancelación del registro en la APCI si se determina que una organización ha cometido «actos que afectan el orden público, la propiedad pública o privada, la seguridad ciudadana, la defensa nacional o el orden interno». El Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso justificaron la medida como necesaria para garantizar la soberanía y proteger los intereses nacionales frente a supuestas injerencias externas. En contraste, los opositores sostienen que la ley constituye un paso hacia el autoritarismo y busca silenciar voces críticas, funcionando como una «ley mordaza» o «anti-ONG» (Sierra Praeli, 2025).

## Preguntas de investigación

Con base en el marco teórico y los dos estudios de caso integrados, presentamos las siguientes preguntas de investigación (PI).

- PI1. ¿De qué manera medios de comunicación y organizaciones peruanas, a través de publicaciones en redes sociales y artículos, construyen socialmente a los PIACI y a las ONG ambientales?
- PI2. ¿Qué discursos y estrategias discursivas, enmarcadas en el sistema de desinformación sobre los PIACI y las ONG ambientales, utilizan estos medios y organizaciones?
- PI3. ¿Cómo las ONG ambientales en el Perú desafían o contrarrestan estas estrategias?

## Métodos

Aplicamos un diseño cualitativo que triangula el análisis crítico del discurso (ACD) y entrevistas en profundidad para analizar cómo medios de comunicación y organizaciones construyen, cuestionan o refuerzan narrativas sobre los PIACI y las ONG en el Perú. Esta triangulación ofreció una visión integral del sistema de desinformación, revelando su dinamismo y la «orquestración estratégica de las prácticas de comunicación» (Recuero, 2025, p. 3).



## Fuentes y selección de datos

Analizamos contenido de acceso público producido entre enero de 2021 y febrero de 2025, un periodo marcado por creciente atención política y mediática a los derechos indígenas y a la regulación de las ONG en el Perú. El recorte temporal fue elegido para abarcar eventos clave vinculados a los estudios de caso; en particular, el llamado de actores políticos y económicos de Loreto en 2022 para derogar la Ley PIACI y la presentación del Proyecto de Ley 3518/2022-CR (proyecto de ley anti-PIACI), rechazado por organizaciones indígenas y ONG mediante pronunciamientos públicos en sus páginas oficiales. A ello siguieron, en 2023, una campaña informativa del Ministerio de Cultura en defensa de los PIACI —respaldada también por las ONG— y el posterior archivamiento del Proyecto de Ley 3518/2022-CR (Montes, 2024). El periodo incluye, además, los ataques continuos y paralelos contra las ONG, que culminaron en abril de 2025 con la promulgación de la Ley 32301, que modifica la Ley 27692 de creación de la APCI (ley anti-ONG). Finalmente, también se incluyó contenido de 2021, por ser el registro más antiguo identificado en las búsquedas mediante palabras clave, proceso que se detalla a continuación.

## Publicaciones en línea

El corpus reunió artículos periodísticos y publicaciones en Facebook de siete fuentes (medios regionales de Loreto, medios nacionales, organizaciones de la sociedad civil y ONG<sup>1</sup>) seleccionadas a partir de un análisis exploratorio de actores relevantes. La elección de estos actores se fundamenta, por un lado, en estudios previos que identifican su participación activa y recurrente en la comunicación pública sobre los temas vinculados a los estudios de caso (Montes, 2024); y, por otro, en una investigación periodística del medio independiente *El Foco*, que documenta la articulación entre algunos de estos actores y los describe como parte de un «cartel de desinformación», además de analizar sus conexiones (Vásquez *et al.*, 2024). Sobre esta base, el corpus incluyó materiales publicados por Amazónica TV, la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL), el diario

---

1 Aunque la selección y el análisis se centraron en el contenido publicado por los medios, es importante señalar que toda organización refleja en gran medida la orientación ideológica de sus propietarios, accionistas, financiadores y otros actores económicos o políticos vinculados, a través de su discurso. El mapeo de estas conexiones económicas y políticas no formó parte del presente estudio. Cabe señalar que, mientras que algunos casos son públicos (por ejemplo, Willax, propiedad de Erasmo Wong Lu-Vega y operado por AgenciaPerú Producciones SAC, un canal de televisión de señal abierta de tendencia conservadora), en otros, como PienSA.pe, de la Asociación de Contribuyentes (una organización privada sin fines de lucro), el financiamiento proviene de donantes individuales y empresas privadas, información que no está disponible públicamente.

*Expreso*, el diario *La Selva*, Radio Tigre, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Wildlife Conservation Society (WCS Perú).

Para las búsquedas usamos dos grupos de palabras clave: sobre los PIACI («PIACI», «pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial» y «Ley 28736») y sobre las ONG en debates normativos («ONG», «organización no gubernamental», «Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional» y «Ley 27692»). Accedimos a las páginas oficiales de cada organización, aplicamos las palabras clave y filtramos por año. Incluimos solo publicaciones con al menos una palabra clave en el titular o texto, pertenecientes a la página oficial, y descartamos duplicados, contenidos irrelevantes y publicaciones de terceros. El corpus final fue de 359 publicaciones: *Expreso* (n = 59), *La Selva* (n = 107), CDL (n = 136), SPDA (n = 55) y WCS Perú (n = 2), sin resultados en Amazónica TV ni Radio Tigre.

La recolección siguió un procedimiento similar mediante el buscador interno de cada sitio web. Obtuvimos 154 artículos: Amazónica TV (n = 28), *Expreso* (n = 14), Radio Tigre (n = 35) y SPDA (n = 77); no hubo resultados en WCS Perú ni *La Selva*, y la CDL no cuenta con sitio web. El contenido se recopiló manualmente con Evernote Web Clipper, y se guardaron texto, enlaces e imágenes o videos. No se incluyeron otras plataformas como Instagram o TikTok por limitaciones de búsqueda, mientras que Facebook sigue siendo la red dominante en el país.

El análisis se centró en 163 publicaciones, las cuales abarcan todas las organizaciones y años incluidos en el estudio. Esta selección respondió a un punto de saturación identificado durante el proceso analítico y se decidió priorizar la profundidad y la calidad de los datos sobre la cantidad.

### Material audiovisual

Realizamos un análisis multimodal de la cobertura televisiva de Willax sobre los temas del estudio, incluyendo reportajes sobre WCS Perú, SPDA y PIACI (n=5) disponibles en su canal de YouTube, y videos de Piensa Pe sobre las ONG (n=2). Además de los enlaces, se recopilaron las transcripciones generadas automáticamente por YouTube.

### Entrevistas en profundidad

Para la triangulación, realizamos cinco entrevistas con miembros de ONG prominentes en el Perú (n = 3) y periodistas de medios independientes (n = 2) que han reportado sobre desinformación en Loreto, y se llevaron a cabo entre diciembre de 2024 y enero de 2025, de manera presencial y virtual. Duraron entre 36 y 91 minutos y siguieron un guion semiestructurado centrado en sus experiencias frente a campañas de desinformación.

Fueron grabadas —con consentimiento informado— y transcritas profesionalmente para un análisis temático cualitativo.

### **Directrices éticas**

Este estudio cumplió con los lineamientos éticos establecidos para investigaciones con participación humana y fue aprobado por el Comité de Ética Institucional de la Michigan State University (código de registro institucional: STUDY00010732). Así, los procedimientos se realizaron respetando las normas éticas concordantes con el Informe Belmont. Todos los entrevistados otorgaron su consentimiento informado, verbal o por escrito, tras recibir información clara sobre los objetivos del estudio, el uso de sus datos y su derecho a retirarse en cualquier momento sin consecuencias. Se garantizó la confidencialidad de las personas participantes mediante la anonimización de sus datos personales y la codificación de las entrevistas. La información recolectada fue utilizada exclusivamente con fines académicos y de publicación, respetando en todo momento la privacidad y la integridad de los participantes. Asimismo, el estudio se desarrolló conforme a los principios éticos previamente descritos en el documento de referencia, incluyendo el respeto por la autonomía, la no maleficencia y la justicia.

### **Análisis de datos**

El corpus se importó a MAXQDA para codificación y análisis bajo un marco de análisis crítico del discurso (Fairclough, 2010). Se crearon dos archivos: uno con posts de Facebook, artículos periodísticos y videos de YouTube, y otro con las transcripciones de las entrevistas. El material se organizó por fuente, tipo de contenido, año y palabras clave, para facilitar la identificación de superposiciones en los discursos sobre las ONG y los PIACI.

El ACD permite examinar el lenguaje en relación con contextos sociales, políticos e ideológicos, y comprender cómo el discurso construye, legitima o deslegitima actores y políticas. El análisis se desarrolló en tres niveles (Fairclough, 2010): textual (palabras, imágenes, estilo, retórica y referencias intertextuales), de práctica discursiva (producción, circulación y estrategias de textos entre medios, organizaciones y actores) y de práctica social (contextos ideológicos y políticos que influyen y son influidos por el discurso, especialmente sobre derechos indígenas, gobernanza ambiental y regulación de ONG). Además, el ACD se conecta con la estructura sistémica de la desinformación (Recuero, 2025).

El análisis multimodal incorporó elementos verbales, visuales y sonoros de artículos, publicaciones de Facebook y videos de YouTube. La codificación se realizó en tres rondas: inductiva (categorías emergentes),

organizativa (agrupación de categorías predominantes y estrategias discursivas, como recontextualización e interdiscursividad) y deductiva (categorías basadas en la teoría de construcción social de las poblaciones objetivo (Schneider e Ingram, 1993) y en el sistema de desinformación (Recuero, 2025).

Una vez definidas las categorías principales de poblaciones objetivo (por ejemplo, competidores y dependientes), discursos (por ejemplo, anti-ONG extremistas) y estrategias discursivas (por ejemplo, interdiscursividad y recontextualización), aplicamos la triangulación comparando cómo estas categorías se reflejan y se relacionan en las diferentes fuentes de datos (publicaciones, videos y entrevistas). Este proceso permitió identificar convergencias, divergencias y complementariedades entre los discursos y estrategias de los actores, al integrar los marcos teóricos utilizados. Así, la triangulación facilitó una comprensión más profunda y completa de la desinformación y las campañas de desprestigio, captando su complejidad y dinamismo.

## Resultados y discusión

A través del análisis crítico del discurso y las teorías descritas, identificamos dos coaliciones discursivas (Hajer, 1995). Por un lado, actores que niegan la existencia de los PIACI en el Perú, se oponen a la creación de reservas previstas en la Ley PIACI o cuestionan la actuación de ONG (Amazónica TV, Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL), diario *Expreso*, diario *La Selva*, Radio Tigre, Piensa.pe y Willax), a los que denominamos coalición discursiva desarrollista; por otro, actores que defienden la existencia y protección de los PIACI (SPDA y WCS Perú), que conforman la coalición discursiva proteccionista. Sus discursos moldean la construcción social de las poblaciones objetivo (Schneider e Ingram, 1993) (PIACI y ONG) y se articulan mediante estrategias discursivas como recontextualización e interdiscursividad (Fairclough, 2010), integradas en el sistema de desinformación (Recuero, 2025). Este sistema opera en una compleja red política, económica y social, ya que promueve políticas desfavorables a los PIACI y ONG, y refuerza la interdependencia entre discurso y su dimensión social.

Organizamos los resultados en tres partes: primero, un panorama del uso de plataformas por los actores analizados; segundo, las construcciones sociales de las poblaciones objetivo en publicaciones, noticias y videos (PI1), junto con los discursos y estrategias asociadas (PI2); y tercero, la respuesta de las ONG frente a la desinformación y ataques discursivos (PI3). Debido a las múltiples interconexiones entre los casos, presentamos los resultados de manera conjunta.

Uso de las plataformas en línea

Las plataformas actúan como estructuras y entornos de producción, circulación y reproducción de la desinformación, por lo que su comprensión es clave para entender este sistema (Recuero, 2025).

En el caso de los PIACI y las ONG, los usos de redes sociales difieren: la coalición discursiva desarrollista emplea principalmente Facebook, mientras la coalición discursiva proteccionista usa principalmente sus propios sitios de noticias. En Facebook, la CDL publica textos extensos acompañados de documentos en papel membretado en formato de comunicados oficiales (figura 1), estrategia que confiere apariencia de legitimidad institucional, mientras la SPDA y WCS optan por textos breves; la SPDA combina piezas gráficas educativas con *hashtags* informativos (#PIACI, #ReservaIndígena) y la CDL, *hashtags* de movilización política (#NoLey-PIACI, #CambioLeyPiaciYA!), buscando involucrar a públicos en torno a una agenda de oposición.

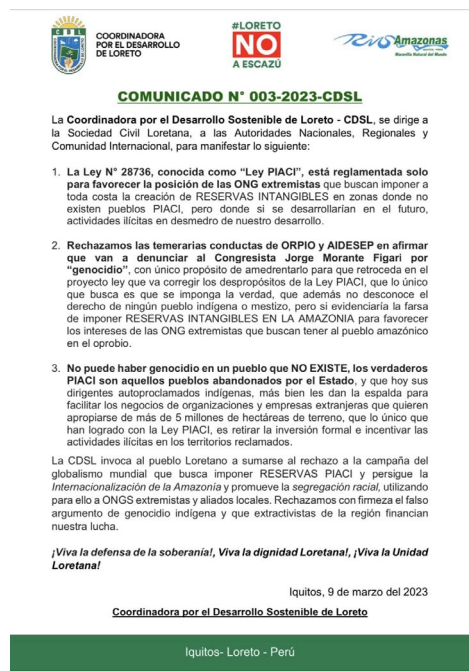


FIGURA 1. Ejemplo de formato de publicación de CDL en Facebook.

Nota. CDL (9 de marzo de 2023).

En YouTube, Willax mantiene el formato televisivo tradicional, mientras Piensa.pe emplea videos de opinión y podcasts, que reflejan estrategias distintas de interacción (*engagement*), circulación y legitimación

discursiva. Estas diferencias evidencian cómo las plataformas coevolucionan con los sistemas de desinformación (Recuero, 2025). A continuación, examinamos los discursos y estrategias que construyen socialmente las poblaciones objetivo y las dinámicas del sistema.

### Las ONG como *competidoras* (PI1)

La coalición discursiva desarrollista construye socialmente a las ONG —y a aquellas organizaciones que la coalición define como tales— como *competidoras* (Schneider e Ingram, 1993), al caracterizarlas negativamente (por ejemplo, «ONG extremistas») y atribuir su poder político y económico a conexiones con agentes extranjeros y gubernamentales. Son vistas como competidoras en la definición de agendas de desarrollo frente a visiones prioritarias para la soberanía regional y nacional. Los discursos que legitiman esta construcción incluyen tanto la crítica a las «ONG extremistas» como los discursos de soberanía y unidad, que se analizan a continuación.

### El discurso anti-ONG extremistas (PI 2)

A nivel textual, se usan con frecuencia adjetivos valorativos e ideológicos, entre los cuales *extremistas* es el principal, junto a variaciones como *ambientalismo extremo*. La coalición posiciona a las ONG como agentes que buscan controlar el territorio amazónico con fines lucrativos y las vincula a agendas internacionales de conservación, para adoptar un tono de movilización política. Por ejemplo, una publicación de la CDL:

Apoyamos que este miércoles 8 de mayo a las 3 p. m. en el Ministerio de Cultura se haga una gran protesta contra este ministerio ideologizado a favor de las grandes ONG extremistas y de los capitales internacionales que buscan apropiarse de la Amazonia peruana!! (7 de mayo de 2024).

Otro término recurrente es *caviar*<sup>2</sup> o *caviarada*, usado para caracterizar a las ONG como grupos elitizados con poder político y económico, supuestamente derivados de sus conexiones extranjeras y con el gobierno regional. Por ejemplo, una publicación del diario *La Selva* (2 de diciembre de 2023): «ONG extremistas y abusivas, que acá en Loreto, sólo se reúnen entre ellos y escuchan a los que quieren escuchar. Los que son favorecidos por el Ministerio de Cultura en el eterno contubernio caviar». La

2 En un libro reciente, Dargent (2025) explica que en Perú la etiqueta «caviar» se usa despectivamente para desacreditar a progresistas, intelectuales o defensores de derechos, al asociarlos con una élite supuestamente desconectada. Más que un insulto, sirve como narrativa política que deslegitima discursos democráticos y legitima prácticas autoritarias o patrimonialistas.

publicación incluye imágenes de miembros de una organización indígena en la COP28, pero que la coalición coloca bajo la categoría de ONG (figura 2), lo que refuerza la etiqueta *caviar* al afirmar:

Ahí lo tienen «posteando fotos» desde Los Emiratos Árabes Unidos, porque no les importa que se les vea el fustán... El pueblo loreto, necesita saber quiénes son, dónde andan y en qué andan (diario *La Selva*, 2 de diciembre de 2023).



**FIGURA 2.** Miembros de una organización indígena en la COP28

Nota. Diario *La Selva* (2 de diciembre de 2023).

De esta manera, las ONG son posicionadas como competidoras de quienes, según la coalición discursiva desarrollista, buscan «propiciar una verdadera visión desarrollista, de respeto por la Amazonía, con pensamiento regionalista unitario» (CDL, 5 de marzo de 2021). El discurso anti-ONG *extremistas* también las presenta como agentes siniestros, segregadores y manipuladores. Son consideradas siniestras por actuar supuestamente sin transparencia —omitiendo información sobre financiadores, gastos en proyectos y motivaciones más allá de la conservación— y acusadas de usar los recursos «con el cuento de la conservación de la Amazonía» para fines «políticos, ideológicos o de proselitismo» (CDL, 5 de marzo de 2021).

En un reportaje de Willax (10 de marzo de 2024) sobre el comercio de fauna silvestre supuestamente afectado por la intervención jurídica y política de ONG, este posicionamiento se refuerza mediante imágenes que las asocian con intrigas o prácticas criminales. El encuadre visual —detrás de las rejas de una puerta similar a una celda—, junto con una banda sonora dramática típica de programas criminales, acentúa la percepción de ocultamiento y manipulación (figura 3).



**FIGURA 3.** Composición visual en reportaje que acusa a ONG en Perú de intervención jurídica y política  
Nota. Willax (10 de marzo de 2024).

La crítica a la falta de transparencia se asocia con la supuesta ausencia de evidencia científica que compruebe la existencia de los PIACI, «una retórica que no tiene sustento científico ni demostrable» (Radio Tigre, 24 de mayo de 2023), lo que, según la coalición, conduce a la «creación indiscriminada y sin rigor científico, de territorios exclusivos e inexpugnables para poblaciones fantasmas» y funciona como «la ideal justificación que necesitan estas ONG para negar la inversión en diversos territorios de Loreto» (Amazónica TV, 13 de marzo de 2023). La recontextualización, que transfiere un discurso de un campo social a otro resignificando su sentido (Fairclough, 2010), refuerza esta narrativa. El discurso científico se moviliza como herramienta de deslegitimación; por ejemplo, una publicación advierte a las autoridades que no se permita influencia externa en decisiones sobre la creación de reservas para poblaciones en aislamiento, «si es que antes no se ha cumplido rigurosamente con estudios suficientes y la validez científica de su existencia» (diario *La Selva*, 24 de marzo de 2023).

Otro ejemplo es la apropiación del discurso de las ONG sobre conservación y protección de los pueblos, recontextualizado en términos económicos o de soberanía nacional: «por parte de algunas organizaciones no gubernamentales que, bajo el pretexto de una falsa defensa de derechos



indígenas, pretenden segregar a las poblaciones originarias, condenándolas a la marginación y la pobreza extrema» (Radio Tigre, 24 de marzo de 2023). La noticia incluye una fotografía de supuestos líderes indígenas de Loreto con carteles reivindicando derechos frente a ciertas acciones de ONG, lo que refuerza el carácter colectivo y la legitimidad de las comunidades (figura 4).



**FIGURA 4.** Supuestos líderes indígenas reclaman autonomía ante la supuesta intervención de ONG en el Perú

(Radio Tigre, 24 de marzo de 2023).

Este discurso, originalmente dirigido a la protección de los pueblos indígenas no contactados, se transforma en una narrativa de segregación social que divide a la población y obstaculiza los objetivos de desarrollo en Loreto y la Amazonía. En este sentido, la CDL (2 de diciembre de 2022) afirma que las ONG serían «los causantes de la debacle económica que vive la región porque fomentan la segregación racial, la convulsión social y la vulneración de los derechos de todos los Loretanos a decidir por su Desarrollo».

Además, el discurso de conservación ambiental se distorsiona para retratar a las ONG como manipuladoras del gobierno, ya sea por la presencia de sus miembros en cargos públicos o por el financiamiento de acciones estatales. Así, la defensa de la conservación se presenta como «fachada para que, una vez que logren la titulación de las reservas PIACI, tramiten desde AIDSEP [una organización indígena peruana] los millonarios y famosos “bonos de carbono”» (Radio Tigre, 31 de marzo de 2023).

Otra estrategia discursiva es la interdiscursividad, la combinación de distintos discursos para construir representaciones sociales (Fairclough, 2010). En este caso, articula el discurso político contra las *ONG extremistas* con el de soberanía y unidad, lo que refuerza la idea de que su actuación en Loreto y Perú amenaza la soberanía del pueblo y la nación. Este proceso opera también a la inversa, ya que presenta la búsqueda de soberanía como competidora de las ONG. A continuación, se discuten algunas características de este discurso.

### El discurso de soberanía y unidad (PI 2)

A nivel textual, se emplean términos relacionados con la soberanía nacional, como *patria chica*, y la primera persona del plural para construir una identidad colectiva frente a las ONG y sus supuestos intereses extranjeros, como se observa en esta noticia de Radio Tigre:

Unidos, los loretanos estamos dispuestos a emprender las acciones de lucha necesarias en el estricto marco legal, para impedir que la Ley PIACI y su reglamento, como está establecido, siga violentando la soberanía y cercenando el territorio amazónico a favor de intereses extranjeros (22 de mayo de 2023).

La noticia incluye una fotografía del «I Fórum de Alcaldes y Autoridades de la Región Loreto», donde un grupo de personas aparece frente a un cartel que menciona los «efectos negativos para el desarrollo integral armonioso y sostenible en la región Loreto» (figura 5). La imagen refuerza visualmente la asociación con las autoridades locales, otorgando legitimidad institucional al discurso.



**FIGURA 5.** Fórum en el que se discuten los «efectos negativos» de la Ley PIACI en la región de Loreto  
Nota. Radio Tigre (22 de mayo de 2023).

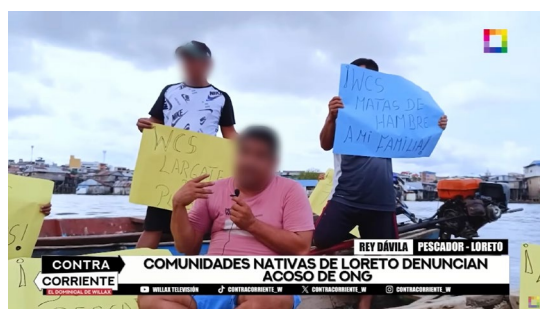
En el plano audiovisual, la unidad se refuerza con imágenes de comunidades indígenas tomadas de la mano o abrazadas, acompañadas de sonidos de instrumentos andinos, en contraste con la supuesta interferencia de las ONG. En un reportaje de Willax (11 de febrero de 2024) sobre el comercio de fauna silvestre, se muestran imágenes de una empresaria sonriente entre miembros de la comunidad, lo que simboliza cercanía y legitimidad social (figuras 6 y 7).



**FIGURAS 6 Y 7.** Recursos visuales que refuerzan la cercanía de la empresaria con la comunidad

Nota. Willax (11 de febrero de 2024).

Otro recurso frecuente son los testimonios de miembros de comunidades nativas, como en un reportaje de Willax (10 de marzo de 2024) donde la narrativa inicia con protestas mostrando carteles como «WCS fuera a mi pueblo» y «WCS matas de hambre a mi familia» (figura 8). Esto construye una autoridad comunitaria simbólica, es decir, el reconocimiento del liderazgo y legitimidad de la comunidad para validar ciertas interpretaciones y movilizar la opinión pública en defensa de la soberanía frente a influencias externas.



**FIGURA 8.** Miembros de comunidades con carteles contra la actuación de ONG en el Perú

Nota. Willax (10 de marzo de 2024).

El discurso de soberanía y unidad sostiene que las ONG sirven a intereses extranjeros, reforzado por su vinculación con fundaciones internacionales. Esto enfrenta intereses externos —acusados de internacionalizar

la Amazonía bajo la conservación— con intereses regionales y nacionales orientados al desarrollo económico, y conectan también con dinámicas internacionales como la reducción de apoyos a la sociedad civil frente a la hegemonía de la extrema derecha.

En Facebook, este discurso relaciona la eliminación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) bajo Trump con cuestionamientos sobre las ONG en Perú, lo que aumenta la necesidad de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI): «¿Qué espera el Congreso peruano para aprobar la ley de fiscalización de las ONG?» (diario *La Selva*, 11 de febrero de 2025). De manera similar, el diario *Expresso* asocia financiamientos externos con amenazas a la soberanía: «Dinero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sirvió para una ONG que defendía a terroristas y denunciaba a militares y policías: el polémico Instituto de Defensa Legal» (diario *Expresso*, 7 de febrero de 2025).

Frente a estas acusaciones, la coalición discursiva desarrollista promueve la aprobación de la Ley APCI para monitorear y restringir la operación de ONG en Perú, incluyendo medios independientes con modelos de financiamiento similares (Ojo Público, 2025). En un video de Piensa.pe (26 de diciembre de 2024, 3:11-3:22), la entrevistada Daniela Ibáñez, analista política del Centro Wiñaq y responsable de la página de Instagram Somos Libres Perú, justifica la necesidad de la ley argumentando que las ONG no transparentan recursos ni sus supuestos vínculos políticos, y que la propuesta sigue modelos de Estados Unidos, Inglaterra y Australia, en respuesta al comentario de la reportera describiendo que «medios de izquierda» califican la ley como «mala, como autoritaria dictatorial y que solamente leyes así existen en Venezuela y Nicaragua».

### **Los pueblos indígenas como *dependientes* (PI1)**

En el contexto de la Ley PIACI y del proyecto de ley anti-PIACI, los pueblos indígenas son socialmente contruidos como *dependientes*, especialmente por la coalición discursiva desarrollista (Schneider e Ingram, 1993). Son representados de forma positiva pero con bajo poder político, justificando la intervención de otros actores —ONG o sector privado— para intermediar sus demandas. Esta representación es paradójica: mientras se promueve el extractivismo como la mejor vía para mejorar su calidad de vida, se critica la ley PIACI y las ONG por no consultar a estos pueblos, que deberían decidir sobre su condición de vida. Esta construcción se sostiene en el discurso del desarrollo y el extractivismo, reforzado por un fuerte llamado emocional a la coyuntura social y económica de Loreto y el Perú.

A continuación, se discuten ejemplos de cómo este discurso articula la construcción social con las estrategias del sistema de desinformación.

### El discurso del desarrollo y del extractivismo (PI2)

Los pueblos indígenas son representados textualmente como *guardianes* o *comunidades nativas* y, en algunos casos, como *verdaderos indígenas*, en contraste con los supuestos representantes de las ONG, los *falsos dirigentes indígenas* o *seudodirigentes indígenas*. Por ejemplo, Radio Tigre (22 de mayo de 2023) señala: «no se está respetando el derecho de los verdaderos pueblos originarios y de los moradores nativos de la Amazonía», mientras Amazónica TV (24 de mayo de 2023) afirma: «En Loreto, en Ucayali, no existen ni deberían existir territorios “liberados”, sólo para usar sus nombres y captar dineros para utilidad personal de quienes se erigen falsamente como los representantes de la Amazonía».

En el plano audiovisual, un reportaje de Willax (11 de febrero de 2024) muestra a supuestos miembros de grupos que denominan de manejo de fauna silvestre como «guardianes de nuestra riqueza natural» (figuras 9 y 10), herederos y transmisores de saberes tradicionales que sustentan prácticas extractivistas sostenibles, ahora amenazadas por la intervención de las ONG según estos actores.



**FIGURAS 9 Y 10.** Miembros de la comunidad retratados como guardianes y transmisores de saberes tradicionales

Nota. Willax (11 de febrero de 2024).

El discurso del desarrollo y el extractivismo se apoya en la vulnerabilidad de los *guardianes* frente a interferencias extranjeras y un contexto socioeconómico desfavorable. Esto fortalece la dependencia de un modelo extractivista presentado como la mejor solución para la sostenibilidad de los pueblos y el desarrollo regional y nacional. En términos de recontextualización, la coalición discursiva desarrollista transforma el discurso social —pobreza, crisis alimentaria y carencia de infraestructura— en un discurso económico que justifica la necesidad de un «verdadero desarrollo», como ejemplifica una publicación del diario *La Selva* (29 de marzo de 2023):

En las comunidades ticunas —por ejemplo—, allá en el bajo Amazonas, los pobladores nativos sufren por la falta de vías de comunicación. Su escasa y empírica producción agropecuaria es despreciada por el propio Estado peruano al no existir conectividad terrestre. No hay su «carreterita», que es lo que durante tanto tiempo reclaman.

La publicación destaca que líderes de la CDL y otros loretanos están en Lima para rechazar los «abusos de la Ley PIACI» y muestra una fotografía del presidente de la CDL, Christian Pinasco Montenegro, junto a una supuesta líder indígena (figura 11). La imagen refuerza la idea de cercanía con las comunidades, lo que legitima el discurso y evidencia las conexiones entre la CDL y los medios aliados.



**FIGURA 11.** El presidente de la CDL junto a una supuesta líder indígena en una acción contra la Ley PIACI

Nota. Diario *La Selva* (29 de marzo de 2023).

El «verdadero desarrollo» se construye como aquel que transforma las realidades locales mediante infraestructura (carreteras, puertos, comunicación) y crecimiento económico basado en actividades extractivistas (por ejemplo, petróleo), como ejemplifica la CDL:

a favor de toda actividad económica productiva que busca generar progreso y desterrar la pobreza en las regiones de la Amazonía, por eso hemos saludado el desarrollo del Foro «Reactivación petrolera en la región Loreto: impulsando el desarrollo sostenible para la



Amazonía Peruana», que ha puesto en agenda la urgente necesidad de reactivar el sector hidrocarburos en el país (24 de febrero de 2023).

Mediante la recontextualización del campo social, estos actores transforman narrativas asociadas a grupos de izquierda —como justicia social y derechos humanos— en instrumentos para deslegitimar a las ONG y reforzar la representación de los pueblos indígenas como dependientes, lo que promueve polarización al sugerir que oponerse al extractivismo equivale a oponerse al bienestar y a los intereses de estos pueblos.

Al considerar el sistema de desinformación como dinámico, observamos que, aunque los discursos se mantengan a lo largo de los años, estos se adaptan a la coyuntura. Por ejemplo, en una publicación de la CDL (4 de marzo de 2021), durante la pandemia de covid-19, la recontextualización del discurso social y científico se utiliza para racionalizar el discurso económico:

Estamos en tiempos difíciles, lo mínimo que deben hacer esta gente y sus organizaciones ONGs y Ministerios, no solo es preocuparse por las plantas y los animales, que eso está bien en una situación normal, sino por los seres humanos que desde esta parte del país están muriendo por falta de oxígeno, cama UCI, medicinas y vacunas; por que ahora vivimos en estado de guerra y debemos salvar vidas!

Estos ejemplos muestran la interdiscursividad que articula el desarrollo con los discursos sobre *ONG extremistas* y soberanía. Se afirma que los *PIACI no existen*, y vinculan esta idea a la supuesta falta de transparencia de las ONG y a la imposición de la ley y reservas que impedirían el «verdadero desarrollo»: «Normas de menor jerarquía están bloqueando la construcción de infraestructura esencial como comisarías, centros educativos y de salud» (diario *La Selva*, 21 de junio de 2024), mientras que «el Ministerio de Cultura avanza con sus estudios... pero ¿a qué costo? Los indígenas exigen ser escuchados» (diario *La Selva*, 16 de enero de 2025). Así, al defender la soberanía y autonomía indígena, se refuerza paradójicamente su construcción como dependientes del sector privado para lograr desarrollo y calidad de vida.

Los discursos de las ONG —la coalición discursiva proteccionista—, en coevolución con el sistema de desinformación, muestran cómo refuerzan esta construcción social desde fundamentos distintos y cómo interactúan con campañas de desprestigio, analizado a continuación a partir de publicaciones, noticias y entrevistas.

### **Interacción limitada de las ONG con la desinformación (PI3)**

Las ONG analizadas responden de manera limitada a las críticas sobre su actuación y la existencia de los PIACI. Sus discursos, centrados en la

protección de pueblos y territorios y en contra de la desinformación, se recontextualizan poco en los ámbitos político y económico, dominados por narrativas opositoras. Esta limitación parece estratégica: evitar interacción directa con narrativas que podrían deslegitimarlas y prevenir distorsiones o amplificación de la desinformación. Aquí se analiza cómo se estructuran los discursos de las ONG y de qué modo contribuyen a la adaptación del sistema de desinformación.

### El discurso de protección de los pueblos indígenas y sus territorios

El discurso proteccionista se basa en la defensa de la Ley PIACI y la creación de reservas indígenas para garantizar derechos y proteger la vida de los pueblos que dependen totalmente de su territorio. Textualmente, se apoya en datos oficiales y en su repetición sistemática, como muestra esta publicación de la SPDA (6 de febrero de 2023): «En nuestro país habitan aproximadamente siete mil peruanos pertenecientes a Pueblos Indígenas u Originarios que se encuentran en Situación de Aislamiento o Contacto Inicial». Este enfoque educativo, reforzado por imágenes tipo panfletos en Facebook (figura 12), refleja la estrategia de las ONG de informar a la sociedad y promover cambios de comportamiento ambiental. Como señala un entrevistado: «las comunicaciones no pueden ser solamente cajas de resonancia de las investigaciones... tienen que ser impulsores de cambios e impulsores de debate» (entrevista 1). Otro agrega: «Nosotros no somos tomadores de decisiones pero sí tenemos... la tarea de dar información para que quienes decidan puedan hacerlo de la mejor manera, de manera informada» (entrevista 3).



**FIGURA 12.** Ejemplo de formato de publicación de la SPDA en Facebook

Nota. SPDA (2 de marzo de 2023).



No obstante, la coalición discursiva proteccionista emplea un lenguaje técnico más que político, basado en normas, leyes y dictámenes, que potencia el argumento jurídico de la Ley PIACI, coherente con las áreas de conocimiento de estas ONG. Por ejemplo, en una noticia de la SPDA (7 de marzo de 2024) sobre la carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos como amenaza a áreas protegidas y PIACI, se citan documentos oficiales: «la deforestación producto de los trabajos de construcción de la vía fue realizada sin contar con el expediente técnico aprobado, sin certificación ambiental ni autorización de desbosque» y «no se podrá iniciar actividades en tanto no haya una opinión técnica previa favorable del Sernanp al instrumento de gestión ambiental que designe la autoridad competente». Aunque la noticia incluye varias fotos de la carretera atravesando el bosque, la primera muestra una vista aérea de Jenaro Herrera, lo que refuerza la conectividad más que la amenaza a la población (figura 13).



**FIGURA 13.** Vista aérea de Jenaro Herrera en noticia de SPDA sobre carretera que amenaza los PIACI Niota. SPDA (7 de marzo de 2024).

La coalición discursiva proteccionista no recontextualiza su discurso hacia el ámbito político, ya que excluye las condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas destacadas en ese campo. En las entrevistas, esto se vincula a una estrategia compartida: «adoptar un rol o un posicionamiento más técnico que político... Tratamos de no tener en realidad posicionamientos políticos en ningún lado y tratamos de que todo lo que sacamos sea realmente más técnico» (entrevista 2). Este enfoque incluye autocríticas, al reconocer que los opositores usan «un discurso que es emotivo, que es directo, que es hasta refrescante..., que se basa en la gente, pero también en polarizar al otro», y sugiere que una comunicación más humana podría ser efectiva: «Nuestra aproximación tiene que ser más humana y más simpática..., mucho más ligada a lo humano, a lo social, a la empatía» (entrevista 1).

Otra característica del discurso de protección de los pueblos indígenas es que refuerza su construcción social como *dependientes*, aunque con una racionalización distinta: dependen del Estado para legitimar su existencia y territorios, y de la sociedad civil para visibilizar sus demandas. En algunos casos, esto se refleja en la agenda de organizaciones multilaterales, como en publicaciones de WCS Perú (23 y 24 de junio de 2023): «Las Naciones Unidas observa con preocupación el proyecto legislativo N°3518-2022-CR que pretende modificar la ley [PIACI]» y «La ONU Perú se manifestó con un pronunciamiento sobre la necesidad de proteger a los pueblos indígenas y la Amazonía para avanzar hacia el desarrollo sostenible».

Este discurso se articula además con el discurso contra la desinformación —ambos relacionados con los PIACI y el desarrollo—, porque señala que modificar la ley amenaza la supervivencia de estos pueblos y la protección de sus territorios.

### **El discurso contra la desinformación en torno a los PIACI y el desarrollo**

En algunas publicaciones, las ONG destacan la desinformación sobre los PIACI difundida por la coalición discursiva desarrollista. Aunque ya se han discutido las características de estos discursos, las ONG responden de forma limitada, al cuestionar principalmente la alegación de ausencia de evidencia científica. Por ejemplo, la SPDA difunde información científica en su sitio web, como:

Según la Ley PIACI, el establecimiento de las reservas se basa en investigaciones científicas que recogen evidencia para demostrar la existencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, y a partir de ello se plantea la necesidad de protegerlos (SPDA, 5 de diciembre de 2024).

Sin embargo, estas publicaciones se concentran en los sitios web y no en Facebook, evitando interactuar directamente con la desinformación en la plataforma y dejando una brecha en la disputa discursiva. Esta estrategia también puede ser deliberada: algunas ONG evitan responder acusaciones para prevenir que sus respuestas sean distorsionadas o utilizadas para deslegitimarlas. Como explica un entrevistado:

Creo que no vale la pena, y más bien hacer bien nuestro trabajo y esperar, pues, a ver qué salga la verdad al final de los casos que están en investigación todavía por las autoridades, por la fiscalía, la policía, etc. (entrevista 2).

El discurso contra la desinformación también señala al desarrollo extractivo como amenaza a la supervivencia de los PIACI y como motivador

de su negación por parte de los opositores. En algunas noticias, la SPDA aborda los impactos de estas actividades sobre las comunidades indígenas y centra su análisis en la conservación y el ámbito técnico/jurídico, mientras que la dimensión política permanece ausente. Por ejemplo:

Otra preocupación es el impacto que puede generarse sobre la Reserva Indígena Murunahua, creada para proteger pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial... y sobre el Parque Nacional Alto Purús, el área protegida con mayor extensión en el Perú y una de las zonas boscosas más remotas y biodiversas del mundo (SPDA, 1 de junio de 2021).

Entretanto, en las entrevistas, miembros de ONG reconocen la coyuntura que moldea el sistema de desinformación, señalando concentración de medios, vínculos con actividades extractivas, control selectivo de información, polarización y barreras al diálogo. También destacan estrategias deliberadas de los actores contrarios, como la articulación de información parcialmente verdadera en contextos sensibles, que legitiman y racionalizan los discursos desinformativos.

Estas observaciones evidencian la naturaleza dinámica del sistema de desinformación, que moldea la construcción social de las poblaciones e interactúa con prácticas sociales y políticas a través de estrategias discursivas adaptadas a la coyuntura.

## Conclusiones

Este estudio presentó un análisis crítico del discurso enmarcado en un sistema de desinformación aplicado a dos casos que involucran a poblaciones indígenas, ONG ambientalistas y grupos económicos en Perú.

Los resultados muestran una construcción social negativa de las ONG como competidoras, promovida por la coalición discursiva desarrollista, que racionaliza y justifica la imposición de consecuencias negativas en la formulación de políticas públicas (Schneider e Ingram, 1993), en este caso la Ley APCI. Esta coalición articula de manera sofisticada distintos discursos para legitimar dicha construcción social. Como señala Recuero (2025), la desinformación constituye un sistema dinámico de comportamientos coordinados en múltiples plataformas, generando polarizaciones (por ejemplo, ONG versus pueblo, ONG versus soberanía y ONG versus desarrollo).

Las estrategias discursivas, como la recontextualización y la interdiscursividad, fueron utilizadas principalmente por la coalición desarrollista. Al atacar a las ONG, reforzar el desarrollo extractivista y la soberanía, también se construye socialmente a los pueblos indígenas como *dependientes* (Schneider e Ingram, 1993), lo que justifica la necesidad de modificar

la ley PIACI y refuerza la idea de que esta coalición define el «verdadero desarrollo».

Por otro lado, las ONG analizadas responden de manera limitada a las críticas sobre su actuación y la existencia de los PIACI. Sus discursos, centrados en la protección de los pueblos y territorios y en la lucha contra la desinformación, se recontextualizan poco hacia los ámbitos político y económico. Las entrevistas sugieren que esta limitación responde a una estrategia deliberada de evitar la interacción directa con narrativas que podrían deslegitimarlas o amplificar la desinformación. Y, aunque este aspecto no haya sido el foco de las entrevistas, esta interacción limitada también puede interpretarse como un síntoma de las regulaciones que dificultan su financiamiento y, por lo tanto, limitan su capacidad de actuación.

Asimismo, los resultados muestran que las relaciones entre discursos, estrategias discursivas y su dimensión social están ancladas en una ideología neoliberal presente durante décadas en América Latina, que sustenta un modelo de desarrollo extractivista (Villarreal Villamar y Muñoz, 2018). En el Perú, la ideología neoliberal consolidada durante el Gobierno de Fujimori ha configurado un modelo extractivista que prioriza la acumulación económica y redefine las relaciones de poder con los pueblos indígenas, ya que intensifica conflictos socioambientales y profundiza la desigualdad en el acceso a los recursos y la toma de decisiones territoriales (Ramos y Medina, 2024). Estas relaciones legitiman los intereses de los actores involucrados y moldean el sistema de desinformación. Además, evidencian la sofisticación de este sistema: el contenido no opera aisladamente, sino que coevoluciona con la coyuntura social, política y económica, lo que produce efectos negativos en el desarrollo de políticas públicas, sobre las ONG y los pueblos indígenas. Los resultados coinciden en gran medida con las estrategias identificadas por Montes (2024) respecto a la desinformación sobre los PIACI en Loreto, promovida por la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL), que la autora enmarca dentro de las teorías de la conspiración.

El estudio presenta algunas limitaciones: el universo discursivo analizado representa solo una parte del total, y otras ONG, medios de comunicación y actores políticos podrían aportar discursos y estrategias que quedaron fuera del análisis. Además, las organizaciones indígenas podrían estar adoptando posiciones e interactuando con el sistema de desinformación de manera diferenciada, mediante una comunicación más informada en los territorios y en el ámbito político. Este aspecto no fue considerado en el alcance del presente estudio y debería ser explorado en investigaciones futuras, desde la perspectiva de la comunicación indígena como forma de

resistencia y enfrentamiento a la desinformación. Tampoco se incluyó un examen sistemático de comentarios, de la red de actores mencionados ni de indicadores de interacción en redes, como *likes* o compartidos. Finalmente, el criterio de saturación que utilizamos ha sido criticado por investigadores cualitativos (por ejemplo, O'Reilly y Parker, 2013), por lo que es posible que hayamos obviado conceptos teóricos relevantes.

No obstante, el estudio aporta a la literatura emergente sobre desinformación en temas socioambientales en América Latina (Urbano *et al.*, 2024) y complementa investigaciones previas sobre la desinformación acerca de los PIACI en Loreto (Montes, 2024). La aportación teórica radica en integrar el sistema de desinformación propuesto por Recuero (2025) con la teoría de construcción de poblaciones objetivo (Schneider e Ingram, 1993) y el análisis crítico del discurso (Fairclough, 2010). Este marco permite analizar las dinámicas entre actores involucrados, a diferencia de estudios centrados únicamente en contenido o efectos en percepciones.

Nuestro enfoque sistemático de los procesos discursivos detrás de la desinformación revela una dinámica de coconstrucción alineada con discursos contrapuestos sobre el bienestar de las comunidades indígenas y el desarrollo regional, ya que ofrece perspectivas útiles para quienes participan en conflictos discursivos con actores de poder.

### **Contribución de autoría**

Iasmim Amiden dos Santos y Bruno Takahashi cumplieron con todas las fases CRediT.

### **Fuente de financiamiento**

Climate and Land Use Alliance (CLUA). Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresados en este artículo son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista ni el respaldo de CLUA.

### **Potenciales conflictos de interés**

Ninguno.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, A. (2015). Amazonia. Violencias, resistencias, propuestas. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 107, 39-62. <https://doi.org/10.4000/rccs.6004>
- Aguilar, O. y Pinchi, W. (2020). Gestión de la comunicación en las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, en sus escenarios de intervención social. Provincia de Trujillo. *Sciéndo Ingenium*, 16(2), 125-129. <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/2892>
- Amiden dos Santos, I., & Takahashi, B. (2025). Decolonial Agents in La Cuyuntura—Narrated Roles of Independent Media Journalists in Bolivia and Peru. *Journalism Studies*, 26(14), 1663-1682.
- Birss, M. (2017). Criminalizing environmental activism. As threats to the environment increase across Latin America, new laws and police practices take aim against the front line activists defending their land and resources. *NACLA Report on the Americas*, 49(3), 315-322. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10714839.2017.1373958>
- Bresolin, E. (2023). Entre resistencia y statu quo: dinámicas culturales del negacionismo climático online. *Desde el Sur*, 15(3), e0042. <https://doi.org/10.21142/DES-1503-2023-0042>
- Dargent, E. (2025). *Caviar. Del pituco de izquierda al multiverso progre*. Penguin Random House.
- Donovan, M. C. (1993). Social constructions of people with AIDS: Target populations and United States policy, 1981-1990. *Review of Policy Research*, 12(3-4), 3-29.
- Dupuy, K., Ron, J. y Prakash, A. (2016). Hands off my regime! Governments' restrictions on foreign aid to non-governmental organizations in poor and middle-income countries. *World Development*, 84, 299-311.
- Echeverría, M., Santamaría, S. G. y Hallin, D. C. (Eds.). (2025). *State-sponsored disinformation around the globe*. Taylor & Francis.
- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis. The critical study of language*. (2.ª ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315834368>
- Fransen, L., Dupuy, K., Hinfelaar, M. y Zakaria Mazumder, S. M. (2021). Tempering transnational advocacy? The effect of repression and regulatory restriction on transnational NGO collaborations. *Global Policy*, 12, 11-22.
- Hajer, M. A. (1995). *The politics of environmental discourse. Ecological modernization and the policy process*. Clarendon Press.
- Heiss, A. y Kelley, J. (2017). Between a rock and a hard place: International NGOs and the dual pressures of donors and host governments. *The Journal of Politics*, 79(2), 732-741.

Hendlin, Y. H. y Palazzo, F. P. (2025). Compartmentalization by industry and government inhibits addressing climate denial. *PLOS Climate*, 4(1), e0000552.

Llave Huamancha, D. F. (2020). Extractivismo en la Amazonía peruana: tensión y relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Antrópica. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(12), 49-75. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7502420>

Ministerio de Cultura. (30 de septiembre de 2020). Ministerio de Cultura fortalecerá la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en el marco de la emergencia sanitaria. <https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/305207-ministerio-de-cultura-fortalecera-la-proteccion-de-los-pueblos-indigenas-en-aislamiento-y-contacto-inicial-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria>

Ministerio de Cultura. (7 de agosto de 2024). Los PIACI son peruanos como tú. Gobierno del Perú. <https://www.gob.pe/institucion/cultura/campa%C3%B1as/38597-los-piaci-son-peruanos-como-tu>

Mitchell, G. E. y Schmitz, H. P. (2014). Principled instrumentalism: A theory of transnational NGO behaviour. *Review of International Studies*, 40(3), 487-504.

Montes, M. R. (2024). Los PIACI en la mira de las teorías de la conspiración. En K. Rummenhöler y M. R. Montes (eds.), *Invisibles, vulnerables y amenazados. Hacia la protección efectiva de los pueblos en aislamiento y contacto inicial* (pp. 117-144). Instituto del Bien Común.

Murillo, A. (2020). Desconfianza, regímenes de verdad, conspiraciones y montajes en el contexto de la covid-19 en México. *Desde el Sur*, 12(2). <https://doi.org/10.21142/DES-1202-2020-0030>

Ojo Público. (2025). Ley APCI: Boluarte aprueba arma del Congreso para aplicar censura previa al periodismo independiente. <https://ojo-publico.com/5597/ley-apci-boluarte-aprueba-arma-legal-legal-contra-medios-como-ojopublico>

O'Reilly, M. y Parker, N. (2013). «Unsatisfactory Saturation»: a critical exploration of the notion of saturated sample sizes in qualitative research. *Qualitative Research*, 13(2), 190-197.

Oreskes, N. y Conway, E. M. (2023). *The big myth. How American business taught us to loathe government and love the free market*. Bloomsbury.

Ozawa, J. V., Woolley, S. C., Straubhaar, J., Riedl, M. J., Joseff, K. y Gursky, J. (2023). How disinformation on WhatsApp went from campaign weapon to governmental propaganda in Brazil. *Social Media + Society*, 9(1), 20563051231160632.

Ramos, S. y Medina, L. (2024). Conflictos sociales en Perú: desafíos y reflexiones sobre tierras indígenas, extractivismo y el modelo neoliberal. *Revista Revoluciones*, 6(15), 56-67. <https://revistarevoluciones.com/index.php/rr/article/view/170>

Recuero, R. (2025). A systemic framework for disinformation on social media platforms. *Platforms & Society*, 2. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/29768624251367199>

Redwin, M. (2025). Isolated tribes under threat as Peru votes down Yavarí Mirim Indigenous Reserve. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2025/09/isolated-tribes-under-threat-as-peru-votes-down-yavari-mirim-indigenous-reserve/>

Sepúlveda, J. G. M., Billeke, C. A. H., Arango, D. E. S., Véliz, J. C. B. y de Frutos, S. V. (2021). Historia y violencia: Asesinatos de líderes indígenas guardianes del medio ambiente en América Latina, 2016-2019. *Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC)*, 11(2), 43-69. <https://www.halac-solcha.org/index.php/halac/article/view/490>

Sierra Praeli, Y. (25 de marzo de 2025). «Ley mordaza» a ONG en Perú pone en riesgo las demandas de las poblaciones más vulnerables contra el Estado. *Mongabay*. <https://es.mongabay.com/2025/03/ley-mordaza-peru-riesgo-demandas-poblaciones-vulnerables-contr-estado/>

Schneider, A. e Ingram, H. (1993). Social construction of target populations: Implications for politics and policy. *American Political Science Review*, 87(2), 334-347.

Turpo-Gebera, O., Quispe-Mamani, E., Contreras-Mejía, O. y Contreras-Mejía, M. (2023). Desinformación mediática en Perú: Revisión sistemática de tesis universitarias. *TECHNO REVIEW. International Technology, Science and Society Review*, 15(1), 39-50. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9236553>

Urbano, K., Oliveira, T., Evangelista, S. y Massarani, L. (2024). Mapeando a desinformação sobre o meio ambiente na América Latina e no Caribe: Uma análise bibliométrica de um campo incipiente de pesquisa. *Journal of Science Communication of América Latina*, 7(1), A02. <https://doi.org/10.22323/3.07010202>

Uzma, S., Alam, R. y Atiq Ur Rehman, A. (2025). Ecolinguistic analysis of environmental discourse in Pakistani print and digital media. *The Critical Review of Social Sciences Studies*, 3(1), 3495-3505. <https://doi.org/10.59075/pr64q758>

Vásquez, V. V., Medrano, G. y Dávila, R. (26 de noviembre de 2024). El cártel de la desinformación en Loreto. *El Foco*. <https://elfoco.pe/2024/11/especiales/el-cartel-de-la-desinformacion-en-loreto/#/>



Villarreal Villamar, M. D. C. y Muñoz, E. E. (2018). Resistencias y alternativas al desarrollo en América Latina y el Caribe: Luchas sociales contra el extractivismo. *Revista Relaciones Internacionales*, 39, 141-163.

**Iasmim Amiden dos Santos**, estudiante de doctorado, Knight Center for Environmental Journalism, College of Communication Arts and Sciences, Michigan State University.

**Bruno Takahashi**, PhD, Brandt Endowed Professor of Environmental Communication, Knight Center for Environmental Journalism, College of Communication Arts and Sciences, Michigan State University.

*Recepción: 28/7/25*  
*Aceptación: 24/11/25*